

Al contestar refiérase
al oficio N° **19424**

18 de noviembre del 2024
DJ-2175

Señor
Josué Chaverri Cruz
PARTICULAR
Ce: jachaverr@ccss.sa.cr

Estimado señor:

Asunto: *Se rechaza su solicitud de criterio, falta de legitimación y falta de competencia.*

Se refiere este Despacho a su correo fechado el 11 de noviembre de 2024, mediante el cual consulta sobre la posibilidad de abstenerse según lo que indica la Ley de Contratación Pública ante un posible conflicto de intereses.

En atención a la consulta planteada, debe advertirse que en el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley N° 7428 del 4 de setiembre de 1994), el órgano contralor, en el ámbito de sus competencias, atiende las consultas que al efecto le dirijan los órganos parlamentarios, los diputados de la República, los sujetos pasivos y los sujetos privados no contemplados en el inciso b), del artículo 4, de la indicada ley.

Al respecto, el “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, R-DC-0197-2011 de las 8:00 horas del 13 de diciembre de 2011, establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva.

Concretamente, el artículo 6 de dicho Reglamento refiere a los sujetos que pueden participar en el procedimiento consultivo ante la Contraloría General de la República, en lo de interés dicho artículo expresamente indica:

“Artículo 6º—Sujetos que participan en el procedimiento consultivo. Son parte del procedimiento consultivo los sujetos consultantes, a saber, los órganos parlamentarios, los diputados de la República, los sujetos pasivos de la fiscalización de la Contraloría General, el auditor y subauditor interno y los sujetos privados que tengan vínculo con temas de competencia del órgano contralor, así como las distintas unidades y áreas del órgano contralor a las que les corresponde atender las gestiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del presente Reglamento (...).”

Por su parte, el mismo texto normativo, establece en el artículo 8 los requisitos necesarios para la presentación de una consulta ante la Contraloría General de la República. En el inciso 4), dispone que están legitimados para presentar consultas aquellos sujetos privados que administren o custodien fondos públicos.

“Artículo 8º—Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428, deberán cumplir los siguientes requisitos: (...)

4. *Plantearse por los sujetos consultantes definidos en el artículo 6, párrafo primero de este reglamento, de acuerdo con los siguientes parámetros:*

-El representante legal en el caso de los *sujetos privados que administren o custodien fondos públicos o bien tengan vínculo con temas de competencia del órgano contralor.* (...)

De la normativa recién mencionada se desprende, que el artículo 6, refiere a los sujetos que pueden participar en el procedimiento consultivo. De ahí que cuando se habla de sujetos pasivos, se entiende que se trata de sujetos vinculados a la fiscalización de la Contraloría General, en vista de esto, los sujetos privados contemplados en el artículo 4, inciso b) de la LOCGR que son custodios o administradores de fondos públicos, claramente están comprendidos en el amplio grupo de sujetos pasivos de la fiscalización del Órgano Contralor.

En este sentido, debemos indicar que su consulta incumple lo previsto en el inciso 4) del artículo 8 del Reglamento en mención. Al respecto, se aclara que la potestad consultiva tiene como propósito inicial emitir criterios jurídicos vinculantes en materia de Hacienda Pública que sean insumo en la toma de decisiones para la Administración Pública consultante.

Ahora bien, sobre el tema de fondo de la consulta, se aclara que con la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública (LGCP), n.º 9986, se materializa un cambio esencial en la gobernanza de las compras públicas del país, al crear un órgano rector a nivel de toda la administración pública en esa materia, la Autoridad de Contratación Pública. Además, crea un órgano ejecutor de dicha Autoridad, la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, a la que asigna, como parte de sus atribuciones, la función consultiva que oriente las decisiones de las Administraciones gestoras de compras públicas, según se trate de la Administración Central o Descentralizada.

Por la naturaleza de los temas planteados relacionados con las causales de prohibición para contratar con la administración en procesos de contratación pública tanto en etapas previas como en la ejecución del contrato, se identifica que los alcances de la consulta involucra aspectos que a partir de la Ley General de Contratación Pública corresponde conocer al Ministerio de Hacienda.

En ese sentido, el artículo 129 de la mencionada Ley, le confiere a la Dirección de Contratación Pública la capacidad técnica consultiva en materia de contratación pública. Lo anterior, sumado a las funciones de rectoría propias de la Autoridad de Contratación Pública, definidas en la misma Ley. En este mismo sentido, de forma concomitante, cabe apuntar la función consultiva que ostenta la Procuraduría General de la República, conforme al artículo 3, inc. b) de su la Ley Orgánica n.º 6815 del 27 de setiembre de 1982.

Por lo anterior, no corresponde al Órgano Contralor pronunciarse sobre los temas señalados, lo anterior sin perjuicio de las atribuciones asignadas constitucional y legalmente, con relación a la vigilancia superior de la Hacienda Pública, en razón de lo cual se encuentra facultada para realizar todas aquellas funciones fiscalizadoras que estime pertinentes respecto de los sujetos pasivos, conforme al marco de legalidad y los criterios técnicos correspondientes.

Finalmente, la Contraloría General de la República se encuentra en un proceso de mejora continua con el propósito de ofrecer productos y servicios de calidad, promoviendo para ello la implementación de procesos ágiles, flexibles, simples y con enfoque al cliente. Por tal razón, pone a disposición de las personas un medio de uso sencillo para la presentación de sus documentos. Le motivamos a hacer uso de este medio, el cual en el corto plazo se constituirá en el medio oficial de presentación de

correspondencia ante la Contraloría General de la República, sustituyendo al correo electrónico. Este medio se encuentra en el siguiente link:
<https://www.cgr.go.cr/05-tramites/pres-docs-cgr.html>

Atentamente,

Luis Alonso Richmond Portuguez
Fiscalizador, División Jurídica
Contraloría General de la República

CGR | Firmado
digitalmente
Valide las firmas digitales

LRP/fpj
Ni: 24323-2024
G: 2024005331-1